



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, siete de marzo de dos mil veintitrés

S19-250

Proceso: ORDINARIO LABORAL- apelación sentencia
Demandante: **YISELA TORO ARANGO** inicialmente representada por su madre FLOR MARIA ARANGO LOPEZ
Demandado: **COLPENSIONES y MARTHA LUCIA DAVILA TORO**
Radicado No.: 05001-31-05-018-2017-00143-01
Tema: pensión sobrevivientes
Decisión: **CONFIRMA**

Link: [19-250 \(018-2017-00143\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora Lucía Dávila dentro del proceso de la referencia.

Conforme el poder allegado, se reconoce personería a la Dra. ADRIANA DEL ROSARIO OCAMPO MAYA identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 32.141.257 y T.P. 135.035 expedida por el del C. S. de la J. para que continúe representando los intereses de la entidad en los términos de la sustitución de poder realizada por el representante legal para procesos de Colpensiones de la firma PALACIO CONSULTORES S.A.S.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 7** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Solicita la demandante, de manera exclusiva y excluyente, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por el deceso de su padre, señor Orlando de Jesús Toro Dávila, a partir del 24 de enero de 2005, fecha del fallecimiento de aquel, dado que por su condición de menor de edad opera la suspensión del fenómeno jurídico de la prescripción; además de los intereses moratorios previstos en el art. 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas del proceso. Igualmente pretende el reembolso de las sumas pagadas a la señora Marta Lucía Toro Dávila debidamente indexadas, madre del causante, quien viene percibiendo la pensión.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que el día 24 de enero de 2005, falleció el señor Orlando de Jesús Toro Ávila, quien se encontraba afiliado a Colpensiones.
- ✓ Que por la muerte de aquel, Colpensiones reconoció y otorgó la pensión de sobrevivientes a la señora MARTA LUCIA DÁVILA TORO, madre del fallecido, mediante la Resolución GNR 316287 del 10 de septiembre de 2014, la cual se viene pagando hasta la fecha.
- ✓ Que el día 30 de agosto de 2016, se presentó a reclamar dicha prestación la señora FLOR MARÍA ARANGO LÓPEZ, en calidad de compañera permanente y en condición de madre y representante legal de la menor Yisela Toro Arango, petición que fue resuelta de manera desfavorable a través de la Resolución Nro. GNR 347226 del 21 de noviembre de 2016, argumentando que la pensión ya había sido concedida a la madre del causante en cumplimiento de la sentencia judicial del 03 de diciembre de 2010, debidamente ejecutoriada, en el proceso con radicado Nro. 2009-00490, y que por lo tanto se trataba de una cosa juzgada que la hacía inmodificable.
- ✓ Que nació el 16 de agosto del año 2000, y es hija del causante; en consecuencia, le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes de manera exclusiva y excluyente, por la muerte de su padre.
- ✓ Que operó en su favor la suspensión de la prescripción de las mesadas pensionales, de conformidad con el artículo 2530 del Código Civil, dado que para la época de los hechos era menor de edad.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtió COLPENSIONES el derecho pretendido e indicó frente a los hechos que eran ciertos los relacionados con el contenido de las resoluciones expedidas, el fallecimiento del causante y el

parentesco de la reclamante, hija menor del afiliado fallecido. Considera que NO es viable analizar la procedencia de la prestación al ya haber sido otorgada judicialmente la prestación aquí reclamada a la señora Marta Lucía Dávila Toro, madre del causante, la que eventualmente debía retornar los montos pagados a Colpensiones, pues le correspondía la administración de los dineros de la seguridad social. De otro lado, advierte que operó la figura de prescripción al señalar que la menor nació en el año 2000, el fallecimiento del padre fue en el 2005 y la reclamación de la pensión se elevó en el día 30 de agosto de 2016. Finalmente aduce que NO es dable suspender el pago que actualmente realiza toda vez que no podía retrotraer una orden judicial por un simple pedimento.

Por su parte la señora MARTA LUCIA DÁVILA TORO se pronunció indicando que NO se oponía a las pretensiones dado que ninguna la afectaba, excepto aquella según la cual le correspondía retornar lo percibido, aspecto en el que refiere que no sólo obró de buena fe, sino que además en ningún momento indujo en error a Colpensiones, ya que entre la fecha de la muerte del causante y el reconocimiento de la pensión (a través de un debido proceso y sentencia judicial) transcurrieron alrededor de 9 años, tiempo suficiente para advertir a quien correspondía la prestación.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 8 de agosto de 2019, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín condenó a Colpensiones a reconocer y pagar a la joven YISELA TORO ARANGO la pensión de sobrevivientes en cuantía de un SMLMV, teniendo en cuenta 14 mesadas anuales, mientras subsistieran las causas que le dieron origen. Cuantificó un retroactivo \$20.464.888 correspondiente a las mesadas causadas entre el 30 de agosto de 2016, fecha de solicitud de la prestación económica, y el 16 de agosto de 2018, fecha de la mayoría de edad.

Igualmente CONDENÓ a la señora MARTA LUCÍA DÁVILA TORO a pagar a YISELA TORO ARANGO la suma de \$84.972.121, debidamente indexado, correspondiente a al retroactivo generado entre el 24 de enero de 2005 y 29 de agosto de 2016.

ABSOLVIÓ a Colpensiones de las restantes pretensiones incoadas en su contra. Condenó en costas a los demandados fijando como agencias en derecho la suma de \$1.023.244 a cargo de Colpensiones y por \$4.248.606 a cargo de Marta Dávila, ORDENANDO la suspensión inmediata del pago de las mesadas a favor de esta última.

Dentro del término concedido por la ley, la señora Marta Lucía Dávila Toro interpuso y sustentó recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DE LA JUEZ PARA DECIDIR

Comenzó por aclarar que, para la data del deceso del afiliado, 24 de enero del año 2005, éste contaba con más de 63.86 semanas cotizadas en los 3 años inmediatamente anteriores, superando así el margen de las 50 exigidas por la ley. Causado el derecho, precisó quiénes ostentaban la calidad de beneficiarios, siendo tales los hijos, bien fueran menores de 18 años, o siendo mayores hasta los 25 incapacitados para trabajar en razón de sus estudios, y que dependieran económicamente del causante, primera hipótesis en la que se ubicaba la aquí reclamante, nacida el 16 de agosto del año 2000, quien al momento del deceso de su padre tenía cuatro años de edad, lo que resulta suficiente para validar su calidad de beneficiaria y para suspender en su favor el fenómeno jurídico de la prescripción (artículos 2530 y 2541 del Código Civil), por lo menos hasta agosto de 2018, cuando arribó a la mayoría de edad, fecha a partir de la cual le correspondía, sin que al momento sucediera, acreditar su condición de estudiante en los términos reseñados por el artículo 2 de la Ley 1574 del año 2012, razón por la que liquidó el retroactivo hasta dicha data.

Aclarado lo anterior, recalcó que era dable reconocer como beneficiarios de la prestación a los padres del causante, SÓLO a falta de cónyuge o compañera permanente o hijos con derecho, tornándose procedente ordenar la suspensión del pago de la mesada que actualmente percibía la madre del afiliado, quien debía asumir directamente el pago del retroactivo hasta la fecha de reclamación de la prestación en el año 2016, pues, de un lado, ante el surgimiento de un nuevo beneficiario, le correspondía a los primigenios retornar lo recibido en exceso, y de otro lado, a partir de allí Colpensiones debió suspender el reconocimiento dado el conflicto entre pretendidas beneficiarias.

Igualmente señaló que el hecho de haberse reconocido el derecho de la madre del causante en sede judicial, NO implica cosa juzgada, menos aun cuando la aquí accionante NO compareció como parte o interviniente en el proceso judicial en el que se hizo dicho reconocimiento. Insistió que se trataban de derechos individuales que no generaba cosa juzgada a quien no tuvo la oportunidad de controvertir.

Que aunado a lo anterior, la señora MARTA LUCIA tenía conocimiento de la existencia de un beneficiario con mejor derecho, hecho confesado en el interrogatorio absuelto, pero aun así recibió el pago de lo no debido. Que una postura contraria avalaría un enriquecimiento sin causa, al recibir lo que por derecho NO le correspondía.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN DE MARTA LUCIA DAVILA TORO

Únicamente aduce que las actuaciones realizadas fueron en base a una sentencia que hasta la fecha se encuentra vigente y que fue dada en derecho.

2.3. ALEGATOS

2.3.1. PRESENTADOS POR LA SEÑORA MARTA LUCÍA DÁVILA TORO

Expresamente indicó que:

Primero. A mi poderdante le fue concedido el derecho a recibir y reclamar la pensión de sobreviviente a través de un debido proceso. Este derecho fue otorgado a través de sentencia judicial, tal y como se hace referencia en este proceso.

Por ende, si se observa la presente demanda, no se está solicitando dejar sin efectos jurídicos aquella decisión judicial, la cual fue concedida por la jurisdicción pertinente y goza de plena validez, ya que se dictó en su momento conforme a derecho. Por lo anterior y según este precedente, la parte demandante está reclamando desde cero un derecho que le fue otorgado a la señora Martha Lucía, madre del causante, como si no hubiera decisión judicial que la antecede.

Segundo. Con este fallo de primera instancia, se le está desconociendo a la señora Martha Lucía la validez de una sentencia judicial que le otorgó un derecho (Pensión de sobreviviente), otorgado por una jurisdicción competente.

Tercero. La parte demandante al momento del fallo de este proceso judicial (primera instancia) ya era mayor de edad y por ende, debía probar que estaba cursando estudios superiores o se encontraba estudiando, requisito adicional al de ser heredero que se debía aportar para ser beneficiario de una pensión de sobreviviente.

Cuarto. La parte demandante solicitó a dos (2) actores y/o demandados (Martha Lucia y Colpensiones) una misma suma de dinero de forma principal, lo cual es improcedente, ya que no solicitó pago en subsidio de una de las partes, sino a ambas partes, en la misma calidad y cantidad al mismo tiempo, operando un pago doble y de lo no debido.

2.3.2. ALEGATOS COLPENSIONES

Solicita se revoque las costas impuestas en la sentencia de primer grado, en donde se condenó a la entidad a pagar \$1.023.244.

Expone que reconoció una pensión de sobrevivientes a la mamá del causante, y por ningún medio le notificaron que había una hija del causante, es por ello que la Juez de instancia decidió condenar a pagarle a la demandante el retroactivo pensional, por lo que mal se hizo al condenarla en costas procesales en primera instancia

Considera que se debe presumir la buena fe a menos que se demuestre lo contrario, situación que imposibilitaba condenarla en costas. Que la norma faculta al juez para condenar en costas a la parte vencida teniendo en cuenta la conducta asumida por ésta, que al ser una norma de carácter procesal tiene vigencia inmediata. Que el Consejo de Estado en sentencia del expediente 10918 de 1999 con ponencia del Magistrado Ricardo Hoyos Duque, quien a su vez cita otra sentencia radicado 10775 sostuvo:

“Es claro que el legislador no ha querido en este caso aplicar un criterio absoluto para determinar a cargo de quien están las costas del proceso y, por lo tanto, no es la ausencia de razón en la pretensión u oposición lo que hace sujeto de sanción a la parte sino su conducta abusiva que implique un desgaste innecesario para la administración y para la parte vencedora”.

Con fundamento en lo anterior, ha actuado según lo ordena la característica filosófica de sus funciones y no puede ejecutar hechos prohibidos por las leyes ni violar sus propios reglamentos, debiendo condenarse a la parte demandante al pago de este concepto. Así las cosas, invocando el ordinal 8, del art. 365 del CGP, pretende ser exonerada en costas.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Cañidos al recurso de alzada, parecería que el problema jurídico únicamente gravitaría en determinar si la madre del causante, ante la existencia de un beneficiario con mejor derecho, está obligada a pagar el retroactivo de la pensión de sobrevivientes concedida en primera instancia a favor de quien para entonces era la hija menor del causante.

No obstante, debe examinarse en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de alzada, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, revocar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

Es por ello que inicialmente se determinará si la joven YISELA TORO ARANGO tiene derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes con ocasión del deceso de su padre, el afiliado señor Orlando de Jesús Toro Dávila.

4. CONSIDERACIONES

NO es objeto de discusión que para la fecha de fallecimiento del señor ORLANDO DE JESÚS TORO DÁVILA, hecho ocurrido el 24 de enero de 2005 según se aprecia en el Registro Civil de Defunción, contaba con 117.87 semanas cotizadas. Aquellas son certificadas en la Historia Laboral que allegó Colpensiones, documento en el que se aprecian que 63.56 de aquellas fueron cotizadas en los tres años inmediatamente anteriores al deceso. Supera así pues el límite establecido por el legislador establecido en el art. 46 de la Ley 100 de 1993

Ahora, para determinar quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 47 de la misma disposición, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que dispone, en lo que interesa a la Sala, que:

“Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

(...) c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes ~~y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno;~~ y, los hijos inválidos ~~si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales,~~ mientras subsistan las condiciones de *invalidez*. Para determinar cuándo hay *invalidez* se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;”

Y más adelante precisa:

d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> A falta de cónyuge, *compañero o compañera permanente* e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente ~~de forma total y absoluta~~ de este;

De la norma transcrita se infiere con claridad dos asuntos. De un lado, que le bastaba a la joven Yisela Toro con presentar el Registro Civil de Nacimiento ante la administradora para percibir la prestación, ya que al haber nacido el 16 de agosto de 2000, únicamente tenía 4 años para el momento en que falleció su padre, presumiéndose su dependencia económica de cara a la obligación alimentaria que existía en su favor.

De otro lado, que los progenitores del causante únicamente pueden percibir la prestación a faltan de beneficiarios como la cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho. Así

que el surgimiento, oportuno o no, de un reclamante posterior con mejor derecho, necesariamente desplazará a la madre o padre del causante.

Es ello lo que precisamente ocurrió en este caso, dado que Colpensiones tuvo conocimiento de la hija menor del causante el 30 de agosto de 2016 cuando, transcurridos 11 años de los hechos, la joven Yisela Toro Arango elevó la correspondiente reclamación a la entidad, lapso durante el cual venía disfrutando la pensión la madre del causante en un 100%, quien tras debatir su derecho en sede judicial, obtuvo sentencia favorable a sus intereses. El proceso primigenio se tramitó ante el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, expediente en el que, en parte alguna, se menciona la existencia de esa menor. En las audiencias llevadas a cabo, NO se indagó a la MARTA LUCIA DAVILA TORO sobre la existencia de hijos, esposa o compañera permanente del causante, los testigos por su parte refirieron no tener conocimiento en torno al tema. Básicamente se debatió la dependencia económica de dicha peticionaria, evidenciándose al afiliado fallecido como el proveedor principal del hogar al ser el único que laboraba, ya que la madre esporádicamente hacía arreglos de costura sin que ello le significasen ingresos suficientes para predicar una independencia económica. Esa fue la conclusión que confluyó en ambas sentencias, es decir, tanto en la sentencia dictada el 3 de diciembre de 2010 en primera instancia, como aquella confirmada el 30 de enero de 2013 por la Sala Tercera Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín.

Nada diferente podía hacer Colpensiones el 10 de septiembre de 2014 cuando expidió la Resolución GNR 316287 a través de la cual dio cumplimiento al fallo aludido. Empero, si resulta reprochable su actitud tras la reclamación elevada el 30 de agosto de 2016 por la hija del causante acreditando su parentesco con el occiso, pues lo procedente era la suspensión inmediata del pago, bien hasta que administrativamente se esclarecieran los hechos o bien hasta que el juez natural de la causa decidiera lo pertinente. Pero otra fue su actitud, y ello ahora apareja un pago del 200% de la prestación, por lo menos desde el 30 de agosto de 2016.

Recuérdese en este punto que, conforme los razonamientos de la a quo, que a juicio de esta Magistratura resultan acertados, la pensión debe reconocerse a favor de la joven Yisela Toro Arango desde el 24 de enero de 2005, fecha del fallecimiento del afiliado, pues el derecho NO se afectó por el fenómeno jurídico de la prescripción dado que el término trienal de que trata el art. 151 del CPT y la SS, se encontraba suspendido en su favor, por lo menos hasta el año 2018 cuando cumplió la mayoría de edad, habiéndose radicado la demanda con antelación, concretamente el 21 de febrero de 2017 conforme se aprecia en el sello impuesto por la Oficina Judicial de Medellín.

Consúltese lo que en torno al tema prevé el artículo 2541 del Código Civil según el cual la *prescripción que extingue las obligaciones se suspende en favor de las personas enumeradas en el número 1o. del artículo 2530, última preceptiva que abarca los incapaces y, en general, de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría.*

Ahora, el problema surge de cara al pago del retroactivo causado. Se limitó el que le corresponde asumir a la madre del causante hasta el 29 de agosto de 2016, presentando oposición a ello a través del recurso de alzada únicamente aduciendo que actuó de buena fe y respaldada por una sentencia judicial emitida con apego al debido proceso. A partir de tal data, lo asume Colpensiones y, como se dijo, al NO suspender el pago, implica que desde el 30 de agosto de 2016 debe pagar un 200% de la pensión.

Conocida es por este despacho la teoría de los efectos liberatorios del pago teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 1634 del Código Civil, según el cual *“El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito, es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía”*. Varias son las sentencias que posteriormente han acogido dicha tesis, son casos que, por regla general, se trata de beneficiarios vitalicios, por lo que se ha sujetado el reconocimiento a la fecha de ejecutoria de la sentencia, pues hacían parte del grupo familiar de quien actualmente recibía el 100%. Sin embargo, dicha intelección no está llamada a aplicarse en el caso objeto de análisis, pues, además de lo expuesto, el derecho en cabeza de Yisela no es vitalicio, y puede que no exista para la fecha de ejecutoria de esta providencia. Pero al margen de ello, el punto sería relevante analizarlo si se endilgara el pago del retroactivo a cargo de Colpensiones. Pero no es ello lo que sucede en este caso, la hija del causante, con interés para debatir este punto, ninguna oposición mostró, y la inconformidad de la abuela de aquella, no es abrogarse la obligación para acarrearla a Colpensiones, sino eximirse del retorno del dinero percibido; se insiste, no porque se dispusiera su pago a la administradora, sino porque debe entregárselo a su nieta.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre este tema en sentencia SL5034-2021. Reconoce que la data de la muerte marca el inicio de la causación de la prestación a sus beneficiarios, que la consecuencia de la extemporaneidad de la reclamación no era otra que la prescripción, y añade que bien puede la entidad, en presencia de un nuevo acreedor, ejercer las acciones para obtener el reembolso o compensación de las sumas pagadas en exceso, por lo que NO necesariamente se tenía que cargar al afiliado con la renuncia a un derecho al someter el disfrute del mismo a la muerte del primigenio reclamante o la ejecutoria de una sentencia. En todo caso, hizo un llamado a analizar las circunstancias particulares del caso, pues

evidentemente la presencia de nuevos beneficiarios podían no sólo afectar el sistema pensional, sino además contrariar el principio de sostenibilidad financiera. Fue ahí donde rememoró el pensamiento plasmado en la sentencia SL870-2018 en la que se efectuó una crítica a los fondos cuando actuaban de manera ligera e imprudente al NO acudir a la potestad que le confería la ley de dejar el suspenso el reconocimiento de la pensión hasta tanto la justicia ordinaria definiera quien tenía mejor derecho cuando se advertía la existencia de otro posible beneficiario con pruebas plausibles que soportaban su reclamo, destacando que si ello NO sucedía y decidía reconocer la prestación NO podía entenderse que la entidad actuara de buena fe exenta de culpa concluyendo que en esos eventos NO era posible descontar las sumas ya pagadas.

Concluye la Corte indicando que:

En este punto, es menester aclarar que, si bien, se reconoce la no afectación del derecho del nuevo beneficiario, esta Sala ha establecido, de acuerdo con las particularidades de cada caso, el efecto liberatorio de la obligación de la administradora respecto de cada una de las mesadas canceladas previamente y, con ello, habilitar la posibilidad de que, aun cuando el derecho se causa al momento de la fecha de fallecimiento, el pago de la misma, se inicie en fecha diferente.

Lo anterior significa que **sólo hasta el 30 de agosto de 2016** puede predicarse una adecuada conducta administrativa de la entidad; a partir de allí, ante la reclamación elevada por la joven Yisela Toro, Colpensiones tuvo conocimiento de la existencia de la que debió ser la única beneficiaria, esperándose de aquella la inmediata suspensión del pago de la mesada que venía disfrutando quien legalmente NO tenía derecho. En palabras de nuestro órgano de cierre, la entidad NO actuó de *buena fe exenta de culpa*, al enterarse de la existencia de la hija del causante, pues, se reitera, debió cesar el pago, y como NO lo hizo, hoy debe asumir las consecuencias de su negligencia y pasividad.

Ahora, como la hija del causante NO se puede ver privada del derecho a disfrutar de un retroactivo, máxime su condición de menor de edad, simplemente implica que, para el caso puntual, es dable endilgar tal obligación en cabeza de la madre del causante, señora Marta Lucía Dávila, quien pese a reconocer que sabía la existencia de su nieta, omitió deliberadamente tal información y bajo el matiz de una sentencia en firme, exculpa su desconocimiento del derecho señalando que imaginaba que ambas, madre del causante e hija de aquel, podían ser destinatarias simultáneas de la misma pensión, propiciando el conflicto que hoy se suscita.

Bajo ninguna óptica, con apego a la figura de la cosa juzgada, puede pretenderse que aquella sentencia emitida con sujeción a una realidad errada, cimentada en información fraudulenta,

continúe surtiendo efectos, o perviva en cabeza de la progenitora del afiliado, un derecho concurrente con una beneficiaria que la excluye del disfrute de la pensión de sobrevivientes.

Cabe resaltar que en sentencia SU-182 de 2018 la Corte Constitucional precisó el alcance del artículo 19 de la Ley 797 de 2003 según el cual cuando *representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, comprueben el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes.*

En la sentencia en mención, la Corte reiteró y desarrolló los criterios trazados por la sentencia C-835 del 2003¹. En dicha oportunidad dijo:

“(…) Solo son dignos de protección aquellos derechos que han sido adquiridos con justo título. Según dispone el artículo 58 de la Carta Política, la protección de los derechos adquiridos implica que su obtención se dio “con arreglo a las leyes vigentes”. Los derechos que se obtienen irregularmente no pueden aspirar a la misma protección e inmutabilidad de la que gozan los derechos obtenidos con apego a la ley.

Más adelante precisó:

“(…) Tampoco hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error a la administración, pues el ordenamiento jurídico sanciona a quién se aprovecha de estos escenarios. El cumplimiento de las normas es un presupuesto básico del Estado social de derecho. Actuar con rectitud y honestidad es una exigencia que se deriva del principio general de la buena fe y que permite crear un ambiente de confianza mutuo, imprescindible para el buen funcionamiento del sistema pensional. El orden constitucional no protege la posición de quien pretende aprovecharse del error o infortunio ajeno para obtener un beneficio particular (...)”

Y en sentencia T-218 de 2012 esa Corporación señaló que *“el principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos pues en ciertas circunstancias, como cuando está de por medio el principio de *fraus omnia corrumpit*, puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir del cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión del juez”*. Y en la T-951 de 2013 consideró que la cosa juzgada *“no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el valor de la justicia (...), de tal suerte que las instituciones del Estado Social de Derecho, establecidas para la promoción de los valores democráticos, basados en la solidaridad y en la vigencia de un orden justo, no pueden permitir que se consoliden situaciones espurias, bajo el argumento de la obediencia ciega a las situaciones juzgadas, cuando las mismas son producto de la cosa juzgada fraudulenta”*.

¹ En dicha sentencia, además, se declaró la exequibilidad condicionada del artículo, en el tendido que la revocatoria directa solo procede cuando se esté ante la comisión de un hecho punible, pero cuando el litigio versa sobre problemas de interpretación del derecho, como, por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación de un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente a uno general; estos litigios deben ser definidos por los jueces competentes.

Con base en lo anterior, concluye la Sala que si bien la judicatura y consecuentemente Colpensiones incurrieron en un error al conceder la pensión de sobrevivientes a la señora Lucía Dávila, ese error no le otorga el derecho para continuar recibiendo la prestación cuando aquel se ha extinguido o ha desaparecido en cabeza suya, menos aun si NO existe un fundamento legal para que siga reconociendo la prestación.

En cuanto a la liquidación, NO observa esta Magistratura alguna falencia en contra de los intereses de Colpensiones, respecto de la cual se surte el grado jurisdiccional de consulta.

De otro lado, se considera procedente el reconocimiento de la INDEXACIÓN de las sumas que se adeudan a la actora en cumplimiento de esta sentencia, atendiendo que efectivamente este dinero no ha entrado al patrimonio de la demandante y por efectos de inflación, cuando lo haga, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo. Por ello, la parte resistente deberá indexar el retroactivo que le corresponde reconocer de la pensión de sobrevivientes, tomando para ello el valor del IPC certificado por el DANE, el índice inicial será el aludido IPC vigente a la fecha de causación de cada mesada, y como índice final el IPC vigente al momento del pago. Aplicando la siguiente fórmula: *Indexación = índice final/ índice inicial x capital – capital*.

Finalmente, se estudiará la solicitud de Colpensiones tendiente a ser exonerada de COSTAS en primera instancia, elevada en los alegatos de conclusión, y aunque técnicamente NO es una etapa en la que sea dable introducir temas de debate, la Sala abordará el punto bajo el entendido que todo lo desfavorable a dicha entidad, puede ser objeto de análisis en el grado jurisdiccional de consulta.

Aclarado lo anterior, tenemos que al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del Código General de Proceso, inicialmente para la concesión de las costas se acudió a un criterio objetivo, dado que sólo se examinaba si había salido adelante la totalidad o no de las pretensiones, sin atender la buena o mala fe de la entidad. Sin embargo, tal posición se morigeró en casos en los que no ha sido la conducta de la entidad la que originaba el conflicto, máxime cuando la postura provenía de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento haya dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas.

NO obstante, la decisión de Colpensiones tendiente a negar administrativamente la pensión de sobrevivientes en cabeza de la hija menor del causante, NO se ajustó a derecho, ni podía abstenerse de decidir de fondo argumentando la existencia de un fallo judicial que otorgó la prestación a persona diferente, menos aun cuando podía utilizar diversas herramientas jurídicas

no sólo para suspender el pago que venía realizando, sino además para recuperar el dinero ya pagado. Pero, se insiste, nada hizo, y su postura pasiva cimentó la existencia de esta acción.

En los términos expuestos se confirmará la decisión objeto del recurso de alzada. Se condenará en costas en esta instancia a la señora Martha Lucía Dávila por no haber tenido éxito en el recurso, fijándose como agencias en derecho la suma de \$100.000.

4 DECISIÓN DEL TRIBUNAL


Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**


PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 8 de agosto de 2019 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral promovido por la joven **YISELA TORO ARANGO** contra **COLPENSIONES** y la señora **MARTHA LUCIA DAVILA TORO** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 22.103.134, conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.


SEGUNDO: costas en esta instancia a cargo de la SEÑORA Martha Dávila. Se fija como agencias en derecho la suma de \$100.000 a favor de la demandante.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA


MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA


MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- apelación sentencia
Demandante:	YISELA TORO ARANGO inicialmente representada por su madre FLOR MARIA ARANGO LOPEZ
Demandado:	COLPENSIONES y MARTHA LUCIA DAVILA TORO
Radicado No.:	05001-31-05-018-2017-00143-01
Decisión:	CONFIRMA SENTENCIA
Fecha de la sentencia:	07/03/2023

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 08/03/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario